



## Arqueología, Productividad Científica y Política en Chile

### Archaeology, scientific productivity and politics in Chile

**Leonor Adán**

ladan@uach.cl

Dirección Museológica. Universidad Austral de Chile

**Gustavo G. Politis**

gpolitis@fcnym.unlp.edu.ar

INCUAPA-CONICET, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Marcela Sepúlveda**

marcelaasre@gmail.com

Instituto de Alta Investigación, Universidad de Tarapacá

**Henry Tantaleán**

henrytantalean@yahoo.es

Instituto Francés de Estudios Andinos, Lima

### Resumen

Los investigadores Leonor Adán, Gustavo G. Politis, Marcela Sepúlveda y Henry Tantaleán analizan los artículos de Andone Gurruchaga y Michelle Salgado “Publicación científica bajo criterios hegemónicos: explorando la realidad arqueológica chilena”, de Luis E. Cornejo “Productividad e impacto de la arqueología chilena: una perspectiva cuantitativa” y Diego Salazar, Rodrigo Alvar, Rolando González, Daniel Hernández, Horacio Ramírez, Felipe Vega y Sebastián Yrarrázaval, titulado “Ciencia y política en la arqueología chilena: el caso de Fondecyt”. El conjunto de todos estos investigadores fue coordinado por Andrés Troncoso para el dossier sobre arqueología, productividad científica y política en Chile, publicado en el número 35 de la Revista Chilena de Antropología.

**Palabras clave:** arqueología, Chile, ciencia, conicyt, política, indicadores de impacto.

### Abstract

Leonor Adán, Gustavo G. Politis, Marcela Sepúlveda and Henry Tantaleán analyse the essays from Andone Gurruchaga and Michelle Salgado “Scientific publishing under hegemonic criteria: exploring Chilean archaeological reality”, Luis E. Cornejo “Productivity and impact of Chilean archaeology: a quantitative perspective” and Diego Salazar, Rodrigo Alvar, Rolando González, Daniel Hernández, Horacio Ramírez, Felipe Vega y Sebastián Yrarrázaval, called “Science and politics in Chilean archaeology: the Fondecyt case”. All those researchers were coordinated by Andres Troncoso for the dossier “Archaeology, scientific productivity and politics in Chile”, published on the number 35 of the journal Revista Chilena de Antropología.

**Key words:** archaeology, Chile, science, conicyt, politics, impact factors.



### Comentarios de Leonor Adán

Los artículos elaborados por Cornejo, Gurruchaga y Salgado y Salazar y coautores se enfocan en diversos asuntos sobre la práctica y producción científica de la arqueología chilena. Resulta de interés conocer puntos de vista de colegas —a quienes mejor conocemos por sus estudios arqueológicos—; sus reflexiones sobre asuntos contemporáneos de relevancia pública. Como se destaca, son escasos los estudios reflexivos sobre nuestra propia práctica, que abordan las implicancias sociales y científicas de los recorridos tomados. Por tanto, son trabajos valiosos que fortalecen una necesaria mirada crítica de nuestra disciplina.

La selección de la *Revista Chilena de Antropología* ocurre en el contexto político y de la administración del Estado chileno actual, en el cual se discute la reforma a la educación superior y la creación de dos nuevos ministerios: de Cultura y de Ciencia y Tecnología. En todos los casos, incluyendo mi comentario, se trata de análisis de actores partícipes de los procesos y, por tanto, parte de la comunidad interesada.

Una primera cuestión que destacan los trabajos de Cornejo y Gurruchaga y Salgado, desde diferentes enfoques, es el recorrido de la producción arqueológica nacional y el aumento de su productividad. Tal constatación permite ciertas reflexiones y conclusiones, con diferentes grados de convicción o posicionamiento, insistiéndose más bien, en la necesidad de abrir el debate. Lo que se manifiesta evidente en ambos, es que la comunidad disciplinaria, parte de ella al menos, ha respondido positivamente a los incentivos de la política pública y en mi opinión hasta la obsecuencia en algunas materias. Esta alta productividad, como observa Cornejo, no se condice con el tratamiento o valoración que recibe la arqueología en términos de financiamiento en Fondecyt, siendo deseable que tales resultados tuvieran el correlato presupuestario o una inversión acorde a la posición internacional de la arqueología chilena. Yo no comparto esa argumentación. Sí creo que hemos sido productivos, y que son necesarios mayores recursos para la arqueología como para las ciencias, artes y humanidades. Mi discrepancia radica en que no creo que las publicaciones Scopus o WoS, aquellas que le han permitido a Cornejo construir el ranking en el que nos ubicamos, sean los únicos criterios posibles o mejores de emplear para efectuar una asignación. Brunner y Salazar (2009) han analizado los efectos de lo que llaman la ISIificación y las dificultades que presenta la consideración predominante de este indicador para las ciencias sociales, humanidades e investigación en educación. En ese sentido, creo que la oportunidad y responsabilidad de generar conocimiento de relevancia o impacto social, de alcance local o global y con financiamiento provisto por el Estado, debiera considerar otros estándares como el aporte y apropiación social, equidad y desarrollo territorial, priorizaciones hacia temas públicos, entre otros (Cfr. Brunner y Salazar 2009, respecto de la experiencia australiana y también, entre otros, Donovan, C. 2008; White et al. 2009). No quisiera agigantar un razonamiento que ha excluido o minusvalorado a campos disciplinarios afines con trayectorias destacadas globalmente. Necesitamos más recursos, pero la razón no es porque tengamos más artículos WoS (ex ISI).

Gurruchaga y Salgado apuntan a otras tendencias generadas como resultado de la mayor productividad y la orientación de los incentivos. Se observa, además de una mayor productividad (métrica absoluta que se matiza con la incorporación de nuevas generaciones, a lo que debe sumarse nuevas carreras abiertas), diversificación de revistas, mayor internacionalización, aumento de publicaciones en inglés y también de trabajos cercanos a las ciencias naturales que categorizan como paleociencias/arqueometría. Los autores traen a la arqueología nacional problemáticas ya analizadas internacionalmente, acerca de la forma de producción de conocimiento que generan estas nuevas lógicas como aquella de la “unidad mínima



publicable” que finalmente contribuye a la generación de cierta “inflación” de la producción científica disciplinaria: mucho paper y no necesariamente avances cualitativos en el conocimiento. En parte consideran positivo la perspectiva global a la que se obligan las publicaciones en medios indizados internacionales (o mejor digamos solamente anglosajones o en inglés) que permitiría avanzar en reflexiones teórico-metodológicos locales (Invernizzi 2004).

Este asunto de la “teoría” vuelve a abordarse por Salazar y colaboradores, quienes destacan la falta de reflexión y producción teórica predominante del contexto nacional. Este punto, reiteradamente declarado en cuanto trabajo arqueológico trate sobre el punto, me produce algo de desconcierto y sospecha. En primer lugar, por la idea de teoría que se explicita poco, también por esa mirada desde la carencia, de algo que nos falta y que justo está preferentemente desarrollada en los países del “primer mundo” (salvo la arqueología social obviamente). Me recuerda a Norbert Elias y su sociedad cortesana: seguro que cuando ya estemos cerca de esa anhelada teoría habrá otra carencia que nuevamente querremos alcanzar. Oscuros pueden ser los caminos de la decolonialidad. En mi caso, prefiero más bien pensar en la idea de que nuestra experiencia y nuestros casos pueden ofrecer referentes teóricos, marcos y modelos quizá, los cuales a diferencia de lo que proponen Salazar y coautores, entiendo son más creativos al nutrirse de disciplinas afines y experiencias y quehaceres diversos, razón por la cual no creo que mayor dedicación en tiempo exclusivo a la arqueología permita mejor o más teoría.

Una cuestión que subyace en todos los trabajos al referirse a la productividad arqueológica es el de la escritura. Aquí quiero comentar dos aspectos. Primero, una temática recurrente cada vez que evaluamos nuestras actas de congresos arqueológicos, es si el investigador activo debe seguir escribiendo en estas publicaciones para las cuales no hay incentivos. Al respecto, repito algo mencionado por otro colega en una asamblea de la Sociedad Chilena de Arqueología (Francisco Gallardo) y es que, los y las arqueólogas debemos tener una capacidad de escritura para diversos medios y audiencias y, claramente, el rol social y público de la arqueología se empobrece cuando nos acotamos en exclusivo a publicaciones WoS (observemos además que este debate ocurre justamente en una revista tradicional chilena no indizada en aquellas listas). Y permítaseme acá, ya que se me ha consultado mi opinión, poner una bandera y es que, esta tendencia y aproximación hacia las ciencias naturales y básicas, que documentan Gurruchaga y Salgado, no debe necesariamente provocar un distanciamiento de otras ciencias sociales y las humanidades (claro está que será aún más difícil mantener los estándares WoS, tal como lo indican Brunner y Salazar). En los tres textos acá comentados apenas se mencionan las humanidades (2 o 3 veces en solo uno de ellos) y es probable que parte de la aridez teórica que constatan los autores pudiera reverdecer con mayores lecturas y mejor formación en esos campos.

Salazar y colaboradores introducen el concepto del prestigio muy a lo Bourdieu y de manera muy acertada en mi opinión. En efecto, parte de lo que consumimos en el campo académico es prestigio, que asociado con la lógica de los incentivos se traduce en muchos casos en recursos económicos. Bernasconi (2010), en investigaciones de educación para las que hay menores recursos, pese a su relevancia; señala al analizar la institucionalización de la profesión académica en Chile, la prevalencia que adquiere el rol del académico investigador, éste “permanecerá como el académico universitario por antonomasia, en el dominio de las creencias y los valores que determinan el prestigio” (Bernasconi 2010: 160), pero, a no entusiasmarse porque “en lo grueso y fundamental, la institucionalización de la profesión académica en Chile se erige sobre los valores, tradiciones y prácticas de las ciencias naturales y exactas, para consternación de los cultores de las humanidades, las ciencias sociales y las profesiones, que deben adaptarse a reglas extrañas a sus hábitos de trabajo” (Bernasconi 2010: 159). Como lo observan los autores, las carreras académicas



universitarias privilegian altamente la productividad científica, que es medida por estas publicaciones indexadas. No obstante, quiero, con los autores, disputar la noción de prestigio, pues dada la vocación de nuestra disciplina de participar en la sociedad con el conocimiento que generamos, pienso que mayor prestigio y amabilidad hay en multiplicar las escrituras a públicos amplios y no solo especializados.

En el mismo estudio se aborda ampliamente la relación de la ciencia y la política en el programa Fondecyt. Me parece de interés que se destaquen aquellas políticas de Estado que el programa reproduce, no de manera planificada necesariamente, como son las desigualdades de género y geopolíticas, en las cuales evidentemente las brechas son inmensas. Igualmente relevante es abrir el debate sobre cómo se sitúa la arqueología en la relación entre ciencia, desarrollo e innovación. Sin soslayar el tremendo desafío que existe en abordar conceptualmente la noción de desarrollo, bienestar y sostenibilidad, extraño una mayor detención por parte de los autores en la definición del rol social y público que la arqueología chilena hoy debe cumplir local, nacional y globalmente. No aseguro que sea un debate que deban responder solo ellos, sino una práctica y reflexión que es bueno explicitar y desarrollar de manera continua. Por otra parte, y siempre en relación al vínculo de la arqueología y la sociedad, se establece que los conocimientos que generamos en ciencias sociales (la arqueología acá incluida) rara vez generan impacto social local, afirmación que pienso no es cierta. Otra cosa es que sea deseable un mayor impacto, y también, que no esté sistematizada y analizada esa contribución. La forma en cómo se pueden enfrentar los “desincentivos” para una ciencia comprometida socialmente, depende indudablemente no solo de cambios posibles en la superestructura, sino también en la agencia individual y grupal.

En Salazar et al. y también Gurruchaga y Salgado encontramos diversas alusiones a la aplicación del conocimiento y su vinculación con el desarrollo. No fue materia de estos trabajos en detalle, pero me aprovecho para señalar que es evidente que la arqueología ha tenido en diversos casos relación con ámbitos de desarrollo social, económico y productivo, en sectores como el turismo, las industrias creativas, del ocio y la cultura, sector de alimentos, servicios, urbanismo, entre otros. No son pocas las experiencias en este sentido, con sus aprendizajes y sus errores. Por lo mismo, es relevante comprender que la relación de la disciplina con los ámbitos de desarrollo, económicos y productivos, no ocurre solo en los estudios de impacto ambiental, y que son múltiples los cruces, las posibilidades –toda vez que el sector productivo va desde las mipymes hasta los grandes controladores del país; empresas públicas y privadas, nacionales y globales– como también los riesgos. La idea de que un investigador o investigadora de conocimiento básico no aplicado deba o pueda ser inmune al ámbito productivo o económico del país es una equivocación y una mirada desde una posición de comodidad que abisma.

Un último punto transversal es la discusión sobre el tipo de investigador o investigadora que tenemos o queremos tener, la forma en cómo debe desarrollarse y las ventajas que tendrían sistemas de financiamiento hacia la carrera del investigador y no a la subvención de proyectos. Al respecto sería importante un abordaje comparativo, que entiendo excede los alcances de los artículos referidos, toda vez que los sistemas nacionales de investigadores han sido también materia de crítica en algunos países (Ver Angulo 2015, para una aproximación comparativa entre Chile y México). Lo que está fuera de dudas para mí es que esta reflexión debe ser solidaria y corresponsable con la sociedad de la cual formamos parte (no con la que nos vinculamos como si estuviéramos afuera, del tipo ¡el científico va a la calle! o la “revolución de las batas blancas”, ¡ja!).

Agradezco a los editores por invitarme a este comentario y saludo a los autores por el trabajo realizado que promueve debates necesarios y apasionantes.



### Comentario de Gustavo G. Politis

Los tres artículos presentados en este número de la *Revista Chilena de Antropología* reflejan una preocupación creciente dentro de las ciencias en general, y la arqueología en particular, que se da con notable intensidad en Chile (ver además Troncoso et al. 2008, Santoro et al. 2013, Pimentel et al. 2017) acerca de los mecanismos de evaluación de la producción y la productividad científica. Creo que ningún otro país sudamericano ha discutido tanto este tema en relación a la evaluación de la investigación arqueológica y me parece también que esto es consecuencia de la importancia mayor que se le da en este país a los índices de indexación de las revistas en los procesos de selección de profesores e investigadores y en la adjudicación de financiamiento.

El texto de Cornejo es un análisis cuantitativo –sofisticado– de la productividad arqueológica de Chile tomando como base las publicaciones en revistas indexadas en la base Scopus. Lo interesante de este trabajo es que, utilizando los mismos parámetros, compara la arqueología de Chile con respecto a la de los países más desarrollados y a las de países cercanos y además la enfrenta con la posición de las otras ciencias en el país. El análisis es novedoso y pone a la arqueología chilena en contexto nacional e internacional. Es sin duda un ejercicio valioso para ver dónde está parada la disciplina. Solo se echa de menos la consideración de algunos aspectos económicos y políticos relacionados a la vigencia y éxito de estos índices, aspectos que sí están presentados y discutidos en el trabajo de Gurruchaga y Salgado. Esto autores también abordan el análisis de la producción de la arqueología chilena en el período 1980-2016 mediante el relevamiento de revistas nacionales y extranjeras. De alguna manera ambos textos son complementarios y muestran cómo se evidencia un notable crecimiento en la productividad de la arqueología chilena en los últimos años y cómo ha aumentado su participación en revistas internacionales.

El tercer artículo es de Salazar y colaboradores y aborda la dimensión política de la arqueología financiada por el Estado mediante el programa Fondecyt; una discusión central pero que, a juicio de los autores, ha estado ausente en los debates recientes sobre el tema. En su conjunto los tres trabajos proponen una mirada acerca de cómo ha ido variando la producción arqueológica en el país, cómo se está evaluando esta producción a la hora de decidir a quién y a dónde van los recursos para la investigación y cuál es la dimensión política de las decisiones de los organismos de financiamiento. En esencia, los tres artículos estimulan un saludable debate y presentan varios puntos para discutir y reflexionar. Abordaré alguno de estos puntos, tomando la situación de Argentina como referencia.

En la década de los 1990 se da un importante proceso de renovación en la arqueología de América del Sur, relacionada al surgimiento de una generación de arqueólogos que, con nuevas y variadas herramientas teóricas y aprovechando la creciente disponibilidad de técnicas arqueométricas, se insertaron en la comunidad científico-académica y comenzaron a hacer una arqueología más alineada con las prácticas internacionales. En este sentido tanto en Chile, como lo notan Gurruchaga y Salgado, como en otros países sudamericanos, se observa a partir de esta década un incremento sustancial de publicaciones en revistas periódicas, sobre todo en inglés. Es interesante observar las dos revistas que más aportan a las publicaciones en inglés en los dos períodos considerados. En el primero (2000-2009) la principal revista (y la única que publica solo en este idioma) es *Current Research in the Pleistocene*, cuyo estatus es un poco difuso. Esta publicación recibía básicamente novedades referidas al poblamiento americano, en forma de resúmenes expandidos, tenía un referato laxo y no estaba en ninguna de las bases bibliográficas habituales de revistas científicas (Scopus, WoS, etc.). No quiero disminuir los trabajos publicado en *Current Research in the Pleistocene*, pero claramente estos no son comparables con los



artículos completos en revistas indexadas. Por el contrario, en el segundo período sí se ve nítidamente como las publicaciones en inglés se incrementan en cantidad y en variedad, siendo *Quaternary International* (con el 7% de la producción) la más representada. En este período se ve más claramente la intención de los arqueólogos chilenos para insertarse en un debate menos local y más internacional.

En Argentina se da un proceso probablemente similar. El cambio en los '90 se produce no solo por un mayor número de egresados en las universidades tradicionales, sino también como resultado de la incorporación a la investigación de jóvenes graduados de las carreras de arqueología que se abrieron (o re-abrieron) en la segunda mitad de la década de los '80 (Olavarría, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta) como producto de la restauración democrática. Esta renovación se profundizó a partir del 2003 como consecuencia de una incorporación relativamente masiva de jóvenes arqueólogos al Conicet, que también en la última década comenzó a utilizar algún tipo de índice, aunque de manera más flexible y ponderando otras variables, para decidir el ingreso a la Carrera de Investigador Científico y la promoción de categorías dentro de la misma. Esto se ve reflejado en las Figura 7 del artículo de Cornejo.

Por otro lado, lo que el trabajo de Gurruchaga y Salgado sugiere, y que la situación argentina apoya, es que las actas de congreso tienden a la extinción como forma de publicación de resultados. Esto es consecuencia tanto de la masividad de las presentaciones y, al menos en los congresos nacionales, la creciente multiplicación de los temas, como por el bajo valor que se les da en la puntuación de estos trabajos en los organismos de evaluación de ambos países.

Creo, como Gurruchaga y Salgado, que la incorporación del factor de impacto como un elemento para calificar la calidad de la producción de un investigador o equipo de trabajo generaría un desplazamiento de ésta hacia revistas de campos contiguos a la arqueología y más vinculados con las ciencias biológicas y ambientales (que tienen factor de impacto en general mucho mayor). Este desplazamiento también llevaría a la necesidad imperiosa de asociación con otros científicos para poder publicar en estas revistas. El trabajo multidisciplinar está muy bien y es siempre bienvenido, pero no puede ser una condición *sine qua non* para la existencia y valoración de la producción en arqueología. Esto podría transformar a una parte de los arqueólogos no en “buscadores de tesoros” como en una época pasada el saber popular nos calificaba, sino como “buscadores de muestras”; muestras que otros más preparados disciplinariamente en ciencias ambientales, físico-químicas o biológicas, analizarán, interpretarán y publicarán (poniendo nuestro nombre de algún lugar dentro de la lista de co-autores). En el caso de los estudios de ADN antiguo esto es notorio y se da un caso paradójico: la creciente avidez de los paleo-genetistas por obtener muestras arqueológicas (de restos humanos, vegetales o animales) es inversamente proporcional a la participación de los arqueólogos en la interpretación y discusión de los resultados. Por último, creo que la consideración del factor de impacto de las revistas en los procesos de evaluación conspiraría con el abordaje más integral de temas arqueológicos/antropológicos cuyo valor debería ser siempre alto. Ya es demasiada la fragmentación espontánea de la investigación arqueológica como para que se la siga fomentando a partir de políticas oficiales de valoración de la producción científica. La publicación de trabajos que aborden temas centrales de la arqueología desde una perspectiva antropológica y social, y que estén difundidos en buenas revistas de la disciplina, debería siempre ser muy bien calificada en cualquier proceso de evaluación, independientemente del factor de impacto de revista o de la editorial del libro en donde se encuentre.

Uno de los puntos interesantes que abordan Salazar y colaboradores es el de la desigualdad de género y geopolítica en la asignación de proyectos del Fondecyt. El primer tema no parece ser un problema actual



en Argentina, al menos en el campo de la arqueología (ver una posición distinta 25 años atrás en Bellelli et al. 1993). Aunque no hay estudios recientes al respecto, tengo la impresión que hombre y mujeres tienen oportunidades similares en el país y que ambos ocupan posiciones altas en la gestión y evaluación de la arqueología, de manera más o menos balanceada. Sin embargo, sí parece persistir en Argentina, quizás no tan marcadamente como en Chile según lo señalan Salazar y colaboradores, una desigualdad geopolítica como reflejo del centralismo histórico de las universidades nacionales más grandes y tradicionales (Buenos Aires, La Plata, Córdoba entre las principales) y de los institutos y centros asociados a ellas. El Conicet ha tratado de des-centralizar la investigación científica y en los últimos años ha adjudicado un 30% de las becas y de los ingresos a la carrera del investigador científico, saltando el orden de mérito propuesto por las comisiones asesoras y se ha ponderado el lugar en dónde están radicados (o proponen radicarse) los postulantes. De esta manera ha privilegiado universidades o centros de investigación localizados en las provincias con menor desarrollo científico (identificadas como zonas prioritarias). Aunque esto ha generado la formación y/o consolidación de grupos de investigación arqueológica en las “zonas prioritarias”, la centralización de la investigación en ciertas áreas sigue siendo notable. Esto además ha tenido algunas aristas negativas: candidatos con muy buenos antecedentes no han ingresado a la carrera de investigación científica, mientras que otros con méritos bastante menores si lo han hecho favorecidos por el hecho (o la promesa) de estar radicados lejos de Buenos Aires o La Plata.

Otro aspecto interesante del trabajo de Salazar *et al* es la observación de que la reproducción de un tipo de práctica arqueológica en el Fondecyt está fomentada por los propios investigadores que forman parte de los grupos de decisión dentro de la institución. O sea, no es “el Fondecyt” en abstracto el único responsable de las decisiones llevadas a cabo en el campo de la arqueología, sino una parte de la misma comunidad arqueológica. De alguna manera esto pasa en el Conicet de Argentina, aunque la renovación periódica de la mitad de las comisiones y la dispersión en tres comisiones distintas para atender las diferentes convocatorias de la institución (Becas, Ingresos a carrera del investigador y Promociones y subsidios) garantiza una dinámica y sana pluralidad. Podemos decir que si bien existe una política científica general del Conicet (delineada por el Presidente y el Directorio de la institución) y que está acorde con una política nacional, las decisiones más específicas y los criterios de evaluación en el campo de la arqueología están básicamente en manos de los arqueólogos. Para esto, entre otras herramientas de valoración de la producción, las comisiones han dividido las publicaciones en tres grupos: 1, 2 y 3. En el primero, el más importante, se encuentran las revistas que están en las bases SCOPUS y WoS, pero se ha agregado a este grupo las que están en el portal SciELO. Además, se considera de Grupo 1 a la revista *Relaciones de la Sociedad Argentina de Arqueología*, ya que, a pesar de no estar en las bases citadas, es la publicación más antigua del país en el campo de la arqueología y antropología en general, tiene un referato muy serio y sin duda es una de las más prestigiosas. De esta manera, creo que, acertadamente, los miembros de las comisiones del Conicet pueden ponderar el peso de las publicaciones en revistas, que están valoradas por multinacionales editoriales, con criterios que contemplen el prestigio y la calidad de las publicaciones locales o regionales.

Por último, quiero sumarme a la larga lista de arqueólogos, algunos de los cuales son autores de los tres artículos que estoy comentando, que cree que la medición de la producción en base a los índices y factores de impacto creados y sostenidos por compañías editoriales multinacionales es solo una herramienta más, y en el caso específico de la arqueología, es una herramienta imperfecta que no debería ser usada exclusivamente, ni como un factor definitivo. Hay una inmensa cantidad de contribuciones centrales para la arqueología de Chile, Argentina y el resto de América del Sur que se encuentra en libros y revistas que no están en las bases de datos bibliográficas usadas habitualmente. Por lo tanto, debemos esforzarnos



para usar las bases de datos solo como un insumo más, como un instrumento que mide “algo”, pero no todo. Las decisiones finales deben estar basadas en la calidad de los libros y los artículos y en su contribución a la arqueología y la antropología. Solo una evaluación cualitativa garantiza que los recursos y los cargos de investigación vayan a las personas con más méritos.

### Comentario de Marcela Sepúlveda

Resulta interesante ver cómo cada cierto tiempo surgen síntesis históricas sobre la arqueología nacional, o reflexiones acerca de la definición y práctica de nuestra disciplina, denotando con ello una recurrente, aunque no por ello constante, preocupación por su devenir y rol en la sociedad (Montané 1972; Massone 1987; Orellana 1996; Cornejo 1997; Carrasco 2006; Troncoso et al. 2008; Carrion et al. 2015; más comentarios recientes de Berenguer, Cornejo, Becker y Cabello 2015 en ocasión a los 50 años de la Sociedad Chilena de Arqueología, entre muchos). Estas referencias expresan a mi parecer un interesante sentido de lucidez, sanidad y madurez disciplinaria, relevante a la hora de pensar nuestro pasado y desarrollo futuro, pero también ilustrativa la forma como han ido cambiando nuestras preocupaciones y prácticas en el tiempo. El reciente debate levantado por Ballester (2016), al interpelar a Berenguer, Cornejo, Gallardo Núñez y Rivera a 30 años de sus planteamientos, nos recordó un momento clave de nuestro devenir relacionado, en ese momento, con la necesidad de definir y validar la arqueología como un campo disciplinar propio y necesario, capaz de posicionarse y competir con otras ciencias en Chile. Eran los inicios de la década de 1980, cuando se instalaban en Chile los primeros concursos Fondecyt, sustento hoy de gran parte de la investigación arqueológica en el país, así como de su productividad, temas que aquí nos convocan.

Prevalciendo la preocupación por situar la arqueología dentro del campo científico, y dejando por ahora de lado la práctica más profesional ligada al desempeño en el marco de los estudios de impacto ambiental, de educación y museo o de gestión patrimonial, los artículos aquí presentados abordan desde distintos enfoques el quehacer arqueológico en el contexto de la normatividad y reglas definidas esencialmente por CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) –y tras ello la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)– y por un gran conjunto de administrativos y agentes de gobierno generalmente lejanos de la práctica científica *per se*. Primando los criterios cuantitativos a la hora de evaluar los currículos y productividad científica de los investigadores responsables o patrocinantes en los distintos concursos, queramos o no, la *cienciometría* se impuso hoy como un método para evaluar nuestro desempeño.

A partir de ello, el texto de Cornejo analiza el lugar de la arqueología en Chile y frente a las arqueologías de otros países latinoamericanos; mientras Gurruchaga y Salgado revisan y discuten las nuevas tendencias en relación a la direccionalidad -intencional o no-, que habrían tomado la mayor parte de las publicaciones indexadas en arqueología. Y si bien no me alegra el tema, alguien podría aclararme ¿cómo podríamos de otra forma evaluar cualitativamente nuestra productividad? ¿O cómo evaluar cualitativamente un trabajo mejor que otro? Mientras cautelemos no imponernos la primacía del Factor de Impacto en nuestras evaluaciones, que conllevaría el menosprecio de ciertas temáticas de nuestros ámbitos de estudio como el arte frente al paleoambiente, pareciera por ahora ser un criterio suficientemente objetivo, si bien no el más perfecto. Coincido en efecto con la preocupante monopolización de las grandes editoriales y la cada vez mayor elitización del conocimiento, como se evidencia en el cobro excesivo efectuado por ciertas revistas de alto impacto para la publicación de artículos, dinero proveniente además generalmente de fondos públicos y que financiaran entonces a estos grandes conglomerados de revistas. Otra



preocupación refiere a la casi completa pérdida de interés para la mayoría de los investigadores en publicar en revistas no indexadas o actas de congreso, al no sumar puntos que serán luego importantes para la evaluación de sus desempeños. Finalmente, el texto de Salazar y colaboradores discute, como algo innegable hoy, la relación entre ciencia y política, ejemplificado en las bases y criterios de evaluación de los concursos Fondecyt, los que obnubilarían según sus autores la posibilidad de evaluar el rol social de la arqueología en nuestra sociedad y realidad chilena.

Hoy pienso que nadie podría negar que la arqueología es la ciencia encargada de generar conocimiento sobre las sociedades pasadas, remotas o más recientes, a partir de sus vestigios materiales y su interrelación con otros restos, pero también con su espacio, ambiente, paisaje, entre otros. Lo que varía en la arqueología actual es su práctica, al existir una mayor diversidad de ámbitos de desempeño, antes exclusivamente restringidos a universidades, museos y centros de investigación. Hoy consultoras medio ambientales ocupan un lugar muy significativo en cuanto a la cantidad de arqueólogos que contratan. No insistiré aquí sobre esa historia y su relación con la promulgada Ley de Medio Ambiente en 1994, ni tampoco sobre las condiciones laborales aún a veces precarias en las cuales muchos arqueólogos, estudiantes y profesionales de otras disciplinas ejercen. Solo quisiera rescatar la despreocupación evidente que prevalece hoy en muchos profesionales -por supuesto no todos-, por no aportar a la creación de conocimiento. Si bien, se ha establecido una brecha cada vez más evidente entre “arqueología académica” y “arqueología profesional”, pareciera que la competitividad y tiempos requeridos en el marco de los estudios de impacto ha conllevado a olvidar la necesidad, si quiera la obligación, de producir artículos, libros u otros documentos de síntesis sobre nuevos hallazgos, nuevas reflexiones sobre la prehistoria local y regional o sobre nuestra práctica arqueológica en general. Más aún existe poca preocupación de quienes se encuentran más ligados a los estudios de impacto por compartir su conocimiento con la sociedad en general, a no ser que intervengan como en ciertos casos el pago de compensaciones impuestas por CMN (Consejo de Monumentos Nacionales) o el CDE (Consejo de Defensa del Estado). En este sentido, quisiera recordar y recalcar que la generación de conocimiento es responsabilidad de todos, así como su debate y crítica, tal como ya vaticinaron que podría suceder Troncoso y colaboradores el 2008. A consecuencia de este nuevo escenario, la responsabilidad y obligación de divulgación ha recaído cada día más en investigadores más vinculados a la academia, quienes lo asumen también por las normas de competitividad establecidas en el actual sistema de investigación, y en el cual el valor de la publicación se sobrepone a cualquier otra actividad o práctica de nuestro quehacer.

Con los años, resulta inevitable reconocer que estudios esencialmente descriptivos han dado paso a aproximaciones cada vez más interdisciplinarias, coincidente con una apertura de Chile a mayores proyectos de colaboración internacional y también nacionales, pero también producto de una cada vez mayor especialización, con una creciente cantidad de capital humano avanzado con postgrados en Chile o en el extranjero. Las normas impuestas por la OCDE, traducidas en un mayor imperativo de competitividad, han establecido quizás no tan explícitamente criterios tales como la “Originalidad”, el “Impacto” y “el Corto plazo”. Al no existir carreras de investigación en Chile, del tipo Conicet en Argentina o el CNRS en Francia, prevalecen proyectos que cada 3-4 años (duración de los Fondecyt Regular) deben buscar renovarse, desarrollándose además en tiempos acotados que no siempre permiten una reflexión exhaustiva y acabada. De no lograr una productividad consecuente sobre todo por parte de su investigador responsable, al fin de su período de ejecución dichos proyectos verán además truncada su posibilidad de continuar. Esta situación conlleva la imposibilidad de llevar a cabo reales programas de investigación, de larga duración, afectando de paso a co-investigadores, profesionales y tesis, quienes



terminan por quedar a merced de continuar sus trabajos de forma individual y en condiciones a veces precarias en cuanto a la posibilidad real de obtener recursos para el desarrollo de sus trabajos.

Así, además de su corta duración, estos formatos de concurso han priorizado, pese a requerir para su viabilidad de un equipo de trabajo con varios colaboradores y profesionales, la carrera individual de investigación, recayendo el peso de la posible continuidad estrictamente en su investigador responsable. Este posicionamiento explica sin duda gran parte de la competitividad entre investigadores y de paso el incremento en la cantidad de publicaciones. Pero también explica la cada vez mayor dificultad de ingreso de nuevos y jóvenes investigadores al concurso Fondecyt Regular, más aún para las mujeres en “edad fértil”. Hoy, todos ellos pueden no obstante apelar a los concursos Postdoctorado y de Iniciación, creados de modo de permitir justamente un ingreso gradual a la carrera de investigación, pero a condición de la previa obtención de un postgrado. Sin eso la posibilidad de concursar a estos dos formatos de proyecto se ve obstruida por bases. Así quienes quieren concursar por fondos de investigación en Conicyt deben hoy ineludiblemente escoger la vía del postgrado, y más aún del doctorado, pues ni el grado de magister permite realmente ir por ellos.

Si bien Salazar y colaboradores destacan una mayor presencia de las mujeres en el concurso Fondecyt, hubiese sido necesario precisar la edad de las investigadoras responsables de forma de evidenciar una escasa adjudicación de proyecto entre mujeres de 30 y 40 años. Adicionalmente a este factor, agregaría la necesidad de precisar esta relación si comparamos la Región Metropolitana con las otras regiones, pues sin duda los resultados empeorarían. Si bien existen hoy políticas de género que apoyan el desempeño de mujeres en investigación, éstas son claramente insuficientes, más aún cuando se trata de sobrellevar vida familiar e investigación en arqueología, ya que ésta última implica generalmente numerosos viajes para asistir a reuniones de diversa índole, seminarios o congresos, sumados a las temporadas de terreno.

Según Gurruchaga y Salgado en los últimos años es posible visualizar una nueva tendencia hacia trabajos donde priman las paleociencias y la arqueometría, pero quisiera recordar que este tipo de publicaciones ya existían antes del 2010 y no fueron pocas. Además, si revisamos los proyectos en curso, veremos que no todos los equipos de investigación están necesariamente orientando sus trabajos hacia esas temáticas, si bien pueden llegar a incorporar análisis puntuales para sus preguntas. ¿Acaso la mayoría de los trabajos no considera la presentación de dataciones?, ¿no son las técnicas empleadas para su obtención algo que podríamos situar dentro de la arqueometría? Pienso que, dada la mayor cantidad de colaboraciones, el mayor nivel de especialización y la creación de laboratorios especializados en Chile, es normal que hoy ocurran re-visitas o el planteamiento de nuevas preguntas, las que no serían abordables y resueltas sin la colaboración de otras ciencias. No se trata con esto de fetichizar las dataciones, espectros o información paleoambiental, sino de reconocer que hoy en la arqueología se han posicionado mayores niveles de interdisciplinariedad y especialización, con una consecuente diversificación de nuestros estudios y, por ende, de los ámbitos de publicación. El problema radica a mi parecer en no olvidar que somos una ciencia social o parte integrante de las humanidades –clasificación OCDE– y que nuestras preguntas deben seguir vinculadas con distintos aspectos de las sociedades humanas estudiadas.

La arqueología es una disciplina que ha sabido a lo largo de su historia y del desarrollo nacional de las ciencias ir posicionándose como uno de los campos más fructíferos y productivos del país, así como en relación a sus símiles latinoamericanos, como bien muestra el texto de Cornejo; si bien su rol aún es escasamente reconocido en Chile, quizás por la poca cantidad de investigadores en relación a otros campos disciplinarios. La creación de nuevas carreras en distintas universidades y regiones, sin embargo,



poco a poco contribuirá paralelamente a otros cambios, como una mayor cobertura en prensa de recientes descubrimientos (algunos realizados inclusive en el marco de proyectos de impacto ambiental), a posicionar la arqueología en el escenario científico nacional, así como en la comunidad país en general. Iniciativas como el recientemente libro sobre Prehistoria en Chile (Falabella et al. 2016) y su alta demanda son quizás reflejo de esta nueva tendencia, aunque creo también que los arqueólogos fuimos sus principales consumidores, más aún quienes valoran la publicación de síntesis para sus informes.

Negar que la ciencia es política o que no hay relación entre ellas resulta para mí incomprendible en nuestros días. La ciencia es hoy política, pero también economía, y no porque yo lo sustente, sino porque desde el momento en que Chile decidiera ingresar hace algunos años a competir en las grandes ligas (dictámenes OCDE), muchos de nuestros trabajos debieron empezar a posicionarse en revistas de mayor impacto, en inglés, además de insertarse en la discusión de problemas más allá de nuestra mera realidad local, en el escenario de problemáticas de relevancia mundial, con consecuencias además netamente económicas. En efecto, en Chile la ciencia es política y economía porque no podemos olvidar que el sistema neoliberal impuesto en su totalidad hace 40 años ha establecido un régimen donde no solo compiten investigadores, sino también las instituciones universitarias, institutos y centros de formación técnica, ante la posibilidad de poder optar a un mayor pedazo de “esa torta” llamada Aporte Fiscal Directo. Las chances de continuidad de muchos académicos en sus respectivas universidades dependerán hoy de su capacidad de poder adjudicarse proyectos Fondecyt y publicar en revistas indexadas (WoS o Scielo), creándose en ciertos casos el pago de incentivos u otros mecanismos para aumentar la cantidad de publicaciones institucionales. Así el sistema de financiamiento de las universidades puede también explicar el posible incremento en la productividad de ciertas áreas y quizás de la arqueología, más aún para las universidades de regiones donde, pese a todos sus esfuerzos, la mayor cantidad de publicaciones significarán aun así menor retribución de parte del Ministerio de Educación (Ramírez y Alfaro 2012).

Coincidiendo con otros autores (Troncoso et al. 2008; Salazar et al. 2017), somos nosotros mismos agentes de nuestra historia. El posicionamiento hoy de la arqueología se debe al involucramiento e investigaciones desarrolladas por parte de individuos en el pasado quizás más que estrategias colectivas como sociedad científica o conjunto gremial, las que a mi parecer siguen siendo insuficientes en un contexto neoliberal donde el escenario futuro no parece por ahora claro, más aún cuando se trata, por ejemplo, de la cantidad de fondos destinados a investigación o la reinserción de investigadores con postgrado, entre otros temas ampliamente destacados en la prensa este último año y que ha válido la sublevación de las llamadas “batas blancas”. Ahora también pienso que el panorama no es tan oscuro para nosotros, pues en nuestra disciplina a diferencia de otras áreas, hemos presenciado un significativo crecimiento en cuanto a espacios laborales relacionados con la investigación, con la creación de nuevas carreras (Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica de Temuco y próximamente Universidad Católica de Santiago), además de la inserción y renovación de académicos en las Universidad de Tarapacá, Universidad Católica del Norte, Universidad de Chile y Universidad de Magallanes y otros centros de investigación. Sin embargo, más allá de estos logros, estamos lejos de haber participado –y dudo que seamos partícipes pronto– de las grandes decisiones relacionadas con la futura y nueva institucionalidad ministerial vinculada a Ciencia y Tecnología en Chile. Pero es también responsabilidad de nosotros y de todos los arqueólogos en Chile –todo ámbito de práctica incluido– involucrarnos a futuro en cargos de gestión y administración, no solo en el Ministerio de Ciencias y Tecnología, sino también en los Ministerio de Educación, Cultura y Medio Ambiente, para hacernos partícipes de decisiones que terminan repercutiendo luego significativamente en nuestro quehacer.



Aquí entonces solo fragmentos de nuestra reflexión sobre la posición de la arqueología como ciencia en Chile, sus tendencias y diversificación en los últimos años y finalmente sobre su rol en la sociedad. Este último, sin duda, aún lejos de precisarse mientras no tengamos un rol más activo en las instancias de poder, de modo de contribuir a la definición de políticas que consideren además nuestros alcances en el devenir de la sociedad. En mi opinión, si bien las investigaciones Fondecyt deben aportar en este sentido, me parece que otras instancias pueden ser más efectivas para estos fines dentro de Conicyt, como los proyectos colectivos Fondap o Anillos, así como Milenios (al amparo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), cuyos impactos en la sociedad son condición *sine qua non* de su existencia.

### Comentario de Henry Tantaleán

Antes de realizar mis comentarios, quiero agradecer a los editores de la Revista Chilena de Antropología por brindarme la oportunidad de comentar esta serie de artículos que han llamado poderosamente mi atención por el coraje que han tenido para reflexionar sobre cómo se está produciendo la ciencia arqueológica en el estado chileno, especialmente porque es una crítica hacia la forma en que sus colegas vienen desarrollando sus prácticas profesionales y a las instituciones que las cobijan.

Al comenzar, debo decir que siendo peruano este debate me suena alejado a pesar de ser un país vecino. Me explico. En mi país, el Perú, no existe financiamiento para las investigaciones arqueológicas con fondos concursables. De hecho, recién en los últimos años, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú (CONCYTEC) ha comenzado tímidamente a establecer parámetros sobre calidad de la producción científica de sus investigadores, como los que ya se están utilizando en varios países de Sudamérica, Chile siendo uno de ellos y, por supuesto, un modelo a seguir.

Por tanto, mis comentarios encierran una sana envidia desde un país en el que no existen verdaderas subvenciones a la investigación, revistas científicas de arqueología dentro de índices de reconocido impacto internacional y donde la comunidad arqueológica, especialmente en investigación, es reducida o directamente compite en otros espacios internacionales. Por tanto, parto de una perspectiva que reconoce los logros que ha tenido la arqueología científica chilena en las tres últimas décadas.

Sin embargo, a pesar de lo beneficioso que ha resultado este desarrollo, como algunos de los colegas chilenos señalan, el modo de alcanzar estándares internacionales y, sobre todo, cómo se hace ciencia en los países latinoamericanos, al verse globalizada, termina reproduciendo a escala regional y nacional las formas de producción científica anglosajona. Por tanto, tomando en cuenta esto, mi perspectiva es también crítica, pero sobre todo contextual, en el sentido que la ciencia no se puede desligar de las agendas económico políticas de los Estados. Ejemplos sobran sobre esta injerencia en la arqueología y no hay espacio acá para recordarlos. No obstante, fuera de esta visión macro, es importante recordar que las agencias de los investigadores también, además de reproducir el sistema, pueden ofrecer resistencia. Por tanto, la conciencia de los investigadores sobre las realidades personales, gremiales, locales y nacionales es un elemento que, aunque es difícil de cuantificar, es importante y puede hacer el cambio. El primero de los artículos aquí comentados nos anima a recordar eso.

Así, el artículo de Salazar y colegas pone sobre el tapete la relevancia de la relación, poco problematizada, que ejercen las instituciones que subvencionan a las investigaciones arqueológicas, develando la paradoja de producir conocimiento, pero dentro de una serie de parámetros aceptados al concursar y obtener dichos fondos. En este caso, los autores nos introducen a la institución chilena que los otorga, el Conicyt.



De esta manera, el texto nos devela los procedimientos por los cuales se realiza la selección y evaluación de los proyectos de Conicyt, especialmente las subvenciones del Fondecyt. Como ellos señalan, este procedimiento, aparentemente aséptico, establece las líneas internas en consonancia con las políticas del Estado chileno a la hora de entregar los fondos. Vistos en el marco de la economía política del Estado chileno dejan en claro que existe una “razón neoliberal” (Laval y Dardot 2013) que dirige las prácticas científicas incluidas, por supuesto, las arqueológicas. Como cualquier otro Estado neoliberal, el “progreso” y “desarrollo” están medidos en términos empresariales. Como siempre, las ciencias sociales u otras ciencias afines que tienen que ver con el pensamiento y la crítica a los modelos económicos y políticos o, simplemente, con la memoria social, no podrían encajar dentro de esta lógica pragmática, tecnócrata, mercantilista e inmediatista. Los arqueólogos se forman en dicha razón neoliberal y actúan en consecuencia bajo un “dispositivo disciplinario” (*sensu* Foucault 1976) llamado bases de los concursos de Fondecyt. Así, los arqueólogos chilenos están disciplinados en el arte de conseguir una subvención y los que actúan como parte de los consejos y grupos de Fondecyt actuarían como legitimadores de dichos dispositivos disciplinarios. La formación universitaria educa en los mismos lineamientos y, de esta manera, adentro del sistema todo aparece como racional y lógico. Adentro del sistema, la crítica no parece tener sentido y resulta molesta.

Sin embargo, poniéndolo en perspectiva, pero sobre todo tomando en cuenta la crítica al sistema económico hegemónico contemporáneo y sus consecuencias sobre la sociedad en general, la crítica de Salazar y sus colegas cobra significancia y se puede sintetizar en la pregunta: ¿para quiénes se hace ciencia arqueológica? Por tanto, su llamada de atención es sobre la forma en que los arqueólogos se han acomodado e insertado dentro de la maquinaria científica del Estado. Entre varias cuestiones adentro del modo de producir conocimiento científico, sobre todo en las últimas décadas, Benjamin Ballester (2016: 122), ha dado cuenta de la existencia de un “modelo fordiano” de sobre-especialización de la arqueología chilena y las consecuentes publicaciones específicas, temas que justamente son señalados y visibilizados en los tres textos aquí comentados. Siendo el estándar de publicaciones, materializado en el producto final de la línea de producción, el más evidente. De este modo, la acumulación del tipo de publicaciones científicas promovido por las instituciones científicas oficiales establece las posiciones de los investigadores en la arqueología chilena. Por ello, para no quedarse en el “baile de los que sobran”, los científicos chilenos deben acogerse a las pautas creadas y controladas, vía Fondecyt, por los países hegemónicos, especialmente anglosajones. Y esto sucede consciente e inconscientemente en varios países donde las publicaciones indexadas son las únicas tomadas como parámetros para medir la calidad de las publicaciones científicas. Incluso en países tan progresistas en su sistema educativo como el Ecuador de Rafael Correa, donde he laborado como investigador y evaluador de propuestas de investigación, los criterios siguen siendo los mismos. Desde Perú se está generando la misma necesidad de seguir dichos parámetros. Por tanto, en este caso concreto, tres países con discursos políticos diferentes y hasta antagónicos, siguen cayendo en la misma forma de reproducir valores y esquemas coloniales. Y ahí, es donde Salazar y asociados hacen un punto importante: una institución supuestamente aséptica como el Conicyt lo que hace, al final, es reproducir dentro de la agenda nacional la colonización de la ciencia chilena.

Por su parte, Cornejo hace un estudio más adentro aun, desde la cienciometría. Así observa y demuestra lo positivo que tiene la internacionalización de la arqueología chilena, incluso con sus pares latinoamericanos. Además, hace evidente que la arqueología chilena está por encima de las otras disciplinas que financia Conicyt, incluso a pesar de ser la que menos se beneficia porcentualmente de las becas recibidas. El mismo Cornejo señala que su perspectiva se enfrenta a la de Gurruchaga y Salgado



cuando éstos ven a la internacionalización como negativa. En todo caso, la visión de Cornejo no está problematizada con respecto a la relevancia social y nacional de la arqueología, sino en el concierto de las publicaciones internacionales bajo parámetros hegemónicos. En este punto, vale la pena rescatar que, a pesar que todo este tinglado mercantilista de las publicaciones es ya bastante evidente, algo que es positivo es que cualquier persona del mundo con conocimientos de inglés tiene la posibilidad de leer sobre una investigación hecha por chilenos. También dicha producción es diseminada hacia otras latitudes, en especial de los “países del sur”, lo cual sin dicho entramado económico sería imposible. Aunque claro, esta no es la filosofía ni el objetivo principal de la maquinaria de las publicaciones científicas.

Así, en general, las tres perspectivas resultan complementarias y establecen una serie de patrones e indicadores claros del Estado y derroteros de la arqueología científica chilena, la cual demuestra elementos positivos y negativos. Sin embargo, el estudio cuantitativo por sí mismo, sin una carga de crítica al modelo económico y político imperante, resulta en la reproducción de un ambiente cómodo para los investigadores locales beneficiados y los que realmente modelan el sistema científico nacional. Por tanto, es importante una crítica hacia cómo se está generando ciencia en Chile y a quién beneficia objetivamente. Sobre todo, es importante reflexionar hacia quiénes está siendo enfocada dicha ciencia. Lograr alcanzar estándares internacionales no siempre se condecirá con las necesidades locales reales, vale decir, la sociedad misma, especialmente de los grupos marginados que, paradójicamente, están más cercanos a nuestros objetos de estudio arqueológico y antropológico. Después de todo, el pasado no es un país extraño, sino uno que hemos extrañado, los arqueólogos, con nuestras prácticas disciplinarias.

#### Nota

Según el Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (REGINA) del Perú, hasta el 9 de mayo de 2017 solo existen 9 investigadores calificados dentro de la Disciplina OCDE de Arqueología.  
<http://regina.concytec.gob.pe/GestionCalificaciones/investigadorCalificado.zul>

### BIBLIOGRAFÍA

- Angulo, C.** 2015. *Políticas públicas para fomentar la producción de conocimiento en profesores investigadores en México y Chile: un estudio de caso*. Tesis de Maestría en Gestión de Políticas Públicas y Educación Superior. Universidad de Guadalajara, México.
- Ballester, B.** 2016. No Necesitamos Fronteras: Comentarios Tres Décadas Después. *Boletín de la Sociedad Chilena de Antropología* 46: 97-129.
- Bellelli, M. Berón y V. Scheinsohn.** 1993. Una arqueología de distinto género. *Publicar en Antropología y Ciencias Sociales* 2(3): 47-61.
- Bernasconi, A.** 2010. La apoteosis del investigador y la institucionalización de la profesión académica en Chile. *Estudios sobre educación* 19: 139-163.
- Brunner, J. J. y Salazar, F.** 2009. *La investigación educacional en Chile: Una aproximación bibliométrica no convencional*. Documento de Trabajo Nº 1. Santiago: CPCE.



**Carrasco, C.** 2006. La práctica arqueológica y la actual construcción de conocimiento arqueológico en Chile. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 39:35-50.

**Carrión, H., C. Dávila, A. Delgado, N. Fuenzalida, P. Kelly, F. Moya, S. Rebolledo, S. Sierralta, J. Sepúlveda y C. González.** 2015. Evaluación de la Arqueología Social en Chile: desarrollo histórico y revisión crítica del proyecto disciplinar. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 45:95-114.

**Cornejo, L.** 1997. Buscadores del pasado. Una breve historia de la Arqueología Chilena. En *Chile antes de Chile*, Prehistoria, pp. 9-16. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago.

**Donovan, C.** 2008. The australian research quality framework: a live experiment in capturing the social, economic, and cultural returns of publicly funded research. *New Directions for Evaluation* 118: 47-60.

**Falabella, F.; M. Uribe, L. Sanhueza, C. Aldunate & J. Hidalgo** (eds.). 2016. *Prehistoria en Chile: Desde sus primeros habitantes hasta los Incas*. Editorial Universitaria, Santiago.

**Foucault, M.** 1976. *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión*. Siglo XXI. Buenos Aires.

**Invernizzi, N.** 2004. Participación en Ciencia y Tecnología en América Latina: una oportunidad para refundar el compromiso social de la universidad pública. *Revista CTS* 1 (2): 67-83

**Laval, C. y P. Dardot.** 2013. *La Nueva Razón del Mundo*. Gedisa. Barcelona.

**Massone, M.** 1987. Construyendo la arqueología chilena. *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 7: 2-5.

**Montané, J.** 1972. Apuntes para un análisis de la arqueología chilena. *Rehue* 4:29-43.

**Orellana, M.** 1996. *Historia de la Arqueología en Chile*. Bravo y Allende Editores, Santiago.

**Pimentel, G., Garcés, A., Kuzminsky, S., Agüero, C. y Nuñez, L.** 2016. El conocimiento en disputa. Algunas observaciones sobre cienciometría, sistemas de acceso y ciencia social latinoamericana. *Estudios Atacameños* 53.

**Ramirez, P. y J. Alfaro.** 2012. Desincentivo a la investigación: resultado del comportamiento inequitativo del modelo de Aporte Fiscal Directo (AFD) a las universidades chilenas. *Formación Universitaria* 5(4): 27-36.

**Salazar, D., R. Alvar, R. Gonzalez, D. Hernandez, H. Ramirez, F. Vega, S. Yrarrázaval.** Ciencia y política en la arqueología chilena: el caso de Fondecyt. *Revista Chilena de Antropología* 35: 187-218.

**Santoro, C., Standen, V., Angelo, D., y Gavilan, V.** 2013. Editorial. Internacionalización de revistas científicas en campos emergentes como antropología: desafíos y oportunidades para Chungara. *Chungara* 45 (3): 367-369

Adán, L; Politis, G; Sepúlveda, M; Tantaleán, H. 2017. Arqueología, productividad científica y política en Chile. *Revista Chilena de Antropología* 35: 218-233  
doi: 10.5354/0719-1472.2017.46775



**Troncoso, A., D. Salazar y D. Jackson.** 2008. Ciencia, Estado y Sociedad: retrospectiva crítica de la Arqueología Chilena. *Arqueología Suramericana* 4 (2):122-145.

**White, H, Boell, S., Haoring, Y, Davis, M., Wilson, C. y F. Cole.** 2009. Lib citations: a measure for comparative assesment of book publications in the humanities and social sciences. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 60 (6): 1083-1096.

Recibido: 16 Abr 2017

Revisado: 3 May 2017

Aceptado: 28 Jun 2017